



Un México mejor pasa por ser igualitario y social (II y último)

El Financiero - 12 de octubre de 2017

La (re)construcción de un mejor futuro para México va más allá de una mera reparación. La construcción de un mejor futuro es una responsabilidad del Estado, pero no excluye a nadie: fuerzas políticas y organizaciones sociales, ciudadanía. Se trata de un magno esfuerzo que bien haríamos en convertirlo en un acuerdo en lo fundamental.

La reconstrucción debe verse como transformación de infraestructuras, así como de formas de entender y concebir la vida futura en sociedad. Es decir, una transformación de modos de hacer las cosas y gobernar. Es en este sentido que la reforma social del Estado debería estar presente como una de las prioridades más altas de las agendas partidarias, articulando y dando sentido a compromisos específicos de reconstrucción.

Su racionalidad debiera estar ordenada por propósitos de equidad enfilados a darle realismo a la propuesta esencial de igualdad que es propia de la democracia. Para las políticas del Estado esta centralidad de la reforma social es primordial, porque las estrategias y programas sectoriales o regionales sólo cobran vigencia cuando se proponen resolver de fondo los orígenes de las asimetrías que caracterizan a la sociedad.

Desde ningún punto de vista, mucho menos si se considera el tamaño de la estructura económica del país, es posible justificar esta malhadada combinación de desigualdad y pobreza. Es en este sentido tarea central, imprescindible y fundamental inscribir la superación de la pobreza y la desigualdad en el corazón de la economía política nacional y de la estrategia y políticas para el desarrollo.



Un mejor futuro pasa por un México igualitario

Una nación en donde la igualdad no sea sinónimo de uniformidad, sino de capacidad de todos los individuos y grupos de elegir y realizar su plan de vida, conforme a sus propios valores. Igualdad como trato semejante frente a lo diferente. Donde todos podamos contribuir a tener garantizado un piso básico y universal de derechos sociales. Para volver realidad la propuesta de Amartya Sen de concebir el desarrollo como libertad.

Un mejor futuro es construir un México con protección social universal

Impulsar un régimen que descansa en un sistema de salud pública que, sin excluir los servicios provistos por el sector privado, se finque en un sistema público no fragmentado, de cobertura universal y financiado a través de impuestos generales. También, impulsar un sistema de protección al ingreso de las personas y las familias bajo un esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo formal y sustentadas en impuestos generales.

Un mejor futuro para México supone buenos empleos; en calidad y en cantidad

Nuestros largos treinta años de magro crecimiento se han traducido en una débil creación de empleo formal, un desbordamiento de la ocupación informal y de la emigración laboral. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la llamada “brecha laboral” se ha tornado falla geológica.

Según sus estimaciones, la fuerza laboral potencial en México es de más de 58 millones (suma de la PEA con la población no económicamente activa disponible). Esto indica el número de personas que se encuentran en desocupación, las que están en *subocupación*¹ y los no *ocupados disponibles* (tienen interés de trabajar, pero han dejado de buscar). Así, México tiene un déficit en la generación de empleos mayor a 20% respecto a la fuerza laboral potencial.

1 INEGI considera como subocupados a las “personas de 15 y más años de edad que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite”.



Un mejor futuro para México precisa una reforma hacendaria redistributiva

Esta reforma debe llevar a y basarse en un nuevo pacto social abiertamente redistributivo; reivindicar el papel estratégico del mercado interno, del empleo y de la diversificación productiva.

La reforma hacendaria debe encontrar su viabilidad política en un consenso nacional sobre el uso transparente y adecuado de los recursos públicos en fines legítimos y claramente identificables. En particular, debe asegurar el cumplimiento de derechos sociales básicos y universales, así como en ampliar la inversión en infraestructura para incrementar la capacidad productiva de la economía y promover el desarrollo regional.

Colocar lo social como palanca para reordenar objetivos y visiones de la macroeconomía, puede probarse no sólo útil para la estabilidad social, sino convertirse en una fuente de renovación de la legitimidad de la política y del propio Estado.

Un mejor futuro para México requiere recuperar la senda del desarrollo

La revisión de la estrategia seguida es urgente y necesaria y debe partir del cuestionamiento de la política económica adoptada (en los últimos 36 años se ha crecido 2.34% promedio anual, y en términos per cápita la tasa es de 0.70% promedio anual). Lo que se impone es la construcción de un nuevo curso de desarrollo que se despliegue en un crecimiento económico alto y sustentable, así como en una progresiva redistribución social y regional del ingreso y de los frutos de ese crecimiento.

Se trata, de principio a fin, de recuperar las capacidades constitucionales del Estado nacional para estimular el crecimiento y auspiciar su sostenibilidad y, a la vez, encarar la desigualdad y la pobreza de manera progresiva y gradualmente acelerada. Un Estado comprometido con la garantía del acceso universal a los derechos humanos consagrados en la Constitución.